

FOJA: 25 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6037-2022
CARATULADO : PRADO/FISCO DE CHILE - C.D.E.

Santiago, veintisiete de Febrero de dos mil veinticuatro

VISTOS:

A folio 1, comparece Luis Pérez Camousseight, abogado, con domicilio en Pasaje Doctor Sótero del Río, N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en nombre y representación de **YASNA PRISCILA PRADO AGUIRRE**, cédula de identidad N° 12.131.428-2, labores de casa, domiciliada en Francisco Subercaseaux 1909, La Serena, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en Agustinas 1225, Piso 4º, comuna de Santiago.

Fundan su pretensión en que su representada, a la edad de 15 años, y siendo militante del "MAPU", el día 27 de mayo de 1984, mientras observaba desde la puerta de su residencia, ubicada en la Población Juan XXIII de La Serena, una manifestación callejera contra el gobierno dictatorial de la época, recibió en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena lanzada desde un bus de carabineros que transitaba a gran velocidad, haciéndola perder el conocimiento, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial donde estuvo varios días hospitalizada por una fractura de mandíbula y pérdida de piezas dentales, que la hizo quedar con una notoria cicatriz en el rostro. Luego, explica que se hizo la respectiva denuncia en la Fiscalía Militar de La Serena, instruyéndose la causa Rol 440-84, pero extrañamente fue sobreseída sin procesar a ningún uniformado fundado en que el actuar de los mismos era lícito.

En cuanto al daño producido, afirma que los hechos descritos han provocado en su representada un perjuicio psíquico, físico y moral



Foja: 1

inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial, daños que tienen carácter de permanentes, puesto que, aunque hayan transcurrido más de treinta años de lo sucedido, la actora continúa con secuelas producto del actuar delictual de carabineros amparado por el gobierno de turno. Afirma que producto del miedo, la demandante no pudo seguir estudiando al quedar con evidentes deformidades en la cara y sin piezas dentales, de modo que su respuesta fue esconderse del mundo, al ser una adolescente sin recursos para tratamientos reconstructivos y menos psicológicos.

En el acápite del derecho, señala que de los hechos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que quienes los perpetraron eran agentes de Carabineros de Chile, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. La responsabilidad del Estado por el daño moral ocasionado a su mandante emana de la Constitución Política de la República, que obliga al Estado a responder por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, como de la Constitución Política de 1925, en la Constitución Política de 1980, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Administrativo, en razón de que el Estado actuó como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas. Al efecto cita y reproduce los artículos 1 inciso 4, 6 y 38 de la Constitución Política de la República y el artículo 4 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, agregando doctrina del profesor Humberto Nogueira referido al bloque constitucional de derechos fundamentales.

Concerniente a la imprescriptibilidad de la acción, cita y reproduce extensa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, a fin de sustentar que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en el caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos de la Constitución de 1980, y la Ley 18.575, por lo que la acción que ejerce en estos autos es imprescriptible.

A continuación, comenta acerca de los fundamentos del derecho internacional que obligan al Estado a indemnizar, señalando que de los



Foja: 1

hechos descritos, torturas sufridas por su mandante, generadores de la responsabilidad del Estado que se demanda, tienen el carácter de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, generan la responsabilidad internacional del Estado de Chile, de la que deriva la obligación de reparar.

Explican que esta obligación encuentra su fuente en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura.

Seguidamente expone que sobre la procedencia de la indemnización del daño moral La responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. De este modo, la indemnización comprende -según el artículo 2329 del Código Civil- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral.

De lo anterior, fluye que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios de Carabineros de Chile, actuando en su calidad de tales, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por su mandante.

Concluye afirmando que en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, a saber: 1. Existencia de daño moral producto de las torturas y prisión política sufridas por su mandante. 2. La acción u omisión emanó de órganos del Estado, ya que agentes del Estado torturaron a su mandante. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fueron agentes de un órgano de su administración los que actuaron (agentes de Carabineros de Chile) y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. 3.- Nexo causal. El daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito civil. 4. Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Por dichas consideraciones, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe



Foja: 1

pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas y prisión política de que fue objeto, la cantidad de **\$200.000.000** (doscientos millones de pesos) a **YASNA PRISCILA PRADO AGUIRRE**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

A folio 8, el FISCO DE CHILE, debidamente representado por la Procuradora Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contestó la demanda, quien luego de hacer un breve resumen de la misma y de las pretensiones allí consignadas, interpone las excepciones y defensas, que a continuación se exponen.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, afirmando la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizada la demandante.

En términos generales explica el demandado, que asumida la idea reparatoria por parte del Estado en lo que respecta a la justicia transicional, ha sido mediante la dictación de las leyes N°19.123 y demás normas conexas, como la ley N°19.992, que se establecieron mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, realizando principalmente tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas (pensión Ley N°19.234, como de la Ley N°19.992, gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda); y c) reparaciones simbólicas (establecimiento de Memoriales y Museos referentes a la Memoria y Derechos Humanos, entre otros); citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que avalaría aquello como monto suficiente de indemnización, ya que los mecanismos de reparación buscan compensar los daños a fin de no volver a solicitar indemnización de perjuicios, razón por la que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado la demandante.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva, señalando que conforme al relato efectuado por la actora, el impacto de la bomba lacrimógena que sufrió ocurrió el 27 de mayo de 1984, es decir, hace más de 30 años, y entendiendo suspendida la prescripción durante el período de



Foja: 1

la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, y a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de julio de 2022, la acción se encontraría prescrita, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone similar excepción alegando lo establecido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, por haber transcurrido en exceso el plazo de 5 años.

Añade, que no existiendo norma expresa, corresponde aplicar el derecho común, siendo prescriptible la acción para perseguir la responsabilidad civil, debiendo establecerse expresamente su imprescriptibilidad, como excepción, lo que no estaría ni siquiera dispuesto en los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile.

En subsidio de las excepciones opuestas, afirma que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Afirma que es improcedente el pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes deberían contabilizarse desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, no pudiendo computar los reajustes desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada, y que en cuanto a los intereses, mientras no exista tal fallo, no hay mora, por tanto, los intereses, también serían improcedentes.

A folio 11, la demandante evacuó el trámite de la **réplica**, ratificando los fundamentos de hecho expuestos en su libelo de demanda y complementando las argumentaciones en que las funda, en base a un estudio que realiza sobre las excepciones, alegaciones y defensas planteadas por el demandado en su escrito de contestación.

A folio 13, se evacuó el trámite de la **dúplica**, en la que el Fisco de Chile reitera sus alegaciones expuestas en la contestación, efectuando algunas precisiones sobre las defensas planteadas en su escrito de contestación.

A folio 16, se dictó la interlocutoria de **prueba**, por el término legal, rindiéndose la que consta en autos.

A folio 30, se citó a las partes para **oír sentencia**.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que **YASNA PRISCILA PRADO AGUIRRE**, dedujo demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, con el objeto de ser indemnizada por la suma de **\$200.000.000**, con reajustes e intereses, más costas, con base a los antecedentes de hecho y de derecho reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

SEGUNDO: Que el demandado contestó la demanda, solicitando su rechazo, en base a las excepciones, alegaciones y defensas que están reseñadas en lo expositivo de este fallo y que se dan por reproducidas en este considerando.

TERCERO: Que los trámites de réplica y dúplica, reiteran los fundamentos de las partes contenidas en la demanda y contestación, respectivamente, agregando lo ahí consignado.

CUARTO: Que la parte demandante a fin de acreditar su pretensión rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

A folio 19:

- 1.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech;
- 2.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech;
- 3.- Carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a nombre de Yasna Priscila Prado Aguirre.
- 4.- Certificado de nacimiento a nombre de Yasna Priscila Prado Aguirre, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 12 de Febrero de 2023.
- 5.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago.
- 6.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.



Foja: 1

7.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

8.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

9.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

A folio 20:

1.- Certificado de Salud del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS), del Servicio de Salud Coquimbo, del Ministerio de Salud, a nombre de la paciente Yasna Priscila Prado Aguirre, elaborado y suscrito por la médico psiquiatra Camila Cossio Fernández, el psicólogo Pablo Rivera Pastén y la Coordinadora PRAIS Andrea Vega Gallardo.

QUINTO: Que para acreditar sus asertos, la parte demandada hizo valer la siguiente prueba:

Documental:

A folio 23:

1.- Oficio Ord.: DGST N°4792-8916, de fecha 7 de septiembre de 2022, emitido por el Jefe del Depto. Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social (IPS), que acredita los pagos recibidos por la demandante Yasna Priscila Prado Aguirre, con beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874, como víctima de prisión política y tortura (Valech).

SEXTO: Que del mérito de autos y de los antecedentes individualizados en los motivos cuarto y quinto de la presente sentencia, valorados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 342 y 346 del Código Civil, y artículos 1700 y 1702 del Código Civil, se tienen por acreditados los siguientes hechos:



Foja: 1

1.- Que la demandante **YASNA PRISCILA PRADO AGUIRRE**, fue víctima de un impacto de bomba lacrimógena en su rostro arrojado por Carabineros de Chile desde un carro policial el día 27 de mayo de 1984.

2.- Que la demandante forma parte de la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, Comisión VALECH II”, que elaboró la Comisión Nacional Sobre Prisión, Política y Tortura, figurando bajo el número **6.985**.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, lo litigioso lo constituye la procedencia de la indemnización reclamada por la demandante, por concepto de daño moral.

OCTAVO: Que, previo a abordar el análisis del fondo de la controversia planteada en autos, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de reparación integral, alegada por la parte demandada, por haber sido ya indemnizada la demandante, fundándose en las reparaciones de los perjuicios sufridos por la actora efectuadas por diversos instrumentos, como así también menciona los actos de desagravio de carácter simbólico y los programas de reparación.

Al respecto, es un hecho evidente que el Estado de Chile cometió violaciones a los derechos humanos durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, cuyas víctimas son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación establecidos en la Ley N°19.992.-, que instauró una pensión de reparación y otros beneficios a su favor, ampliada posteriormente por el aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, de la Ley N°20.874.-, y Ley N°19.234 de exonerados políticos, de lo que se concluye que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, su obligación de reparar el mal causado a las víctimas de la violencia estatal y sus familiares expresados tales leyes, cobrando, entonces, aplicación a su respecto la regla de onus probandi consagrada en el artículo 1698 del Código Civil, en el sentido que quien alega la extinción de una obligación, se encuentra en la necesidad de acreditar dicha circunstancia, y, siendo el pago alegado por el Fisco -ya que, desde un punto de vista sustantivo, esta es la finalidad de la “reparación integral” cuya existencia sostiene- un modo de extinguir las obligaciones, consagrado como tal en el artículo 1567 N°1 del Código Civil,



Foja: 1

corresponde al Fisco probar la efectividad de encontrarse extinguida su obligación, sea a través del pago o de algún otro modo de extinguir las obligaciones, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Sin embargo, de la probanza incorporada legalmente al pleito, no se desprenden elementos de convicción que permitan establecer suficientemente la efectividad de haberse extinguido la obligación reparatoria en cuestión, en lo referido, particularmente, a la demandante de este juicio.

A mayor abundamiento, la mentada Ley N° 19.992.-, prescribió en su artículo 1°, lo siguiente: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior”.*

Así también, se dispuso en el artículo 4° del mismo texto legal, que: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2° de la presente ley, **la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975.***

Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.”

NOVENO: Que, asimismo, habrá que estar a lo expresado en el mensaje presidencial de dicha normativa (N°203-352), de fecha 10 de Diciembre de 2004, en el que se señaló lo siguiente: *“Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta la Comisión. En primer lugar dice que tienen que haber medidas institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación, el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.*



Foja: 1

En segundo lugar, dice que tienen que haber medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de esta terrible experiencia.

Estas medidas, por cierto, y esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, tienen que haber medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.

Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas. La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.”

DÉCIMO: Que, en ese mismo sentido, cabe estar al decreto supremo N°1040, publicado en el Diario Oficial de 11 de noviembre de 2003, que creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, de cuyo informe se proponen, entre otras, una serie de medidas divididas en tres categorías: aquellas individuales, dirigidas a las víctimas, que intentan reparar el daño ocasionado; las colectivas, de carácter simbólico, que tienen un mayor efecto sobre la percepción actual y futura de lo sucedido y del juicio social, que buscan garantizar que no se



Foja: 1

vuelvan a producir hechos de la gravedad que se han documentado; y aquellas referidas a la institucionalidad, para asegurar la puesta en práctica de las medidas, así como la vigencia de los derechos humanos en la convivencia futura de la nación.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, la Ley N°20.874, en su artículo 1°, estableció que el aporte único entregado por esta normativa tiene el carácter de una reparación “parcial”.

DUODÉCIMO: Que, por lo demás, en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago (que, como se dijo, es la finalidad a la cual se dirige sustancialmente la “reparación integral” alegada por la parte demandada), como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial, y, en comparación, los mecanismos e instrumentos legales de reparación invocados por el demandado no se ajustan a la norma internacional referida, la cual, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un pleito análogo, que *“la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley”* (Considerando 13° de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).



Foja: 1

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en los apartados precedentes, corresponderá desestimar la excepción de reparación integral, opuesta por la parte demandada.

DÉCIMO CUARTO: Que, por otra parte, el Fisco de Chile alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por el demandado en apoyo a su defensa, relativo al



Foja: 1

recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que *“... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito”* (Sentencia de Reemplazo ROL ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de las excepciones de prescripción enarboladas por la parte demandada.

DÉCIMO QUINTO: Que descartadas las alegaciones previas del demandado, en relación a la pretensión de la demandante, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

DÉCIMO SEXTO: Que siendo un hecho de la causa que la actora ha sido víctima directa de un delito de lesa humanidad ocasionado por el actuar de agentes del Estado, tal como ha quedado establecido en el fundamento sexto de esta sentencia, lo que surge además del reconocimiento de esta



Foja: 1

calidad que se ha hecho en la nómina confeccionada por la Comisión Valech II donde la demandante figura bajo el N°6.985, lo cual conduce a establecer la responsabilidad del Estado en las lesiones sufridas por la demandante provenientes precisamente de un acto de violencia política.

Así las cosas, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Que, ciertamente, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que éstas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual, ningún órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario, debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como del Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el derecho el Derecho Internacional Humanitario.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño moral reclamado por la parte demandante.



Foja: 1

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

El daño moral consiste en la lesión a los intereses “extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88).

DÉCIMO OCTAVO: Que como ya se ha señalado previamente, la actora figura calificada como víctima en el informe emitido por la Comisión Nacional Sobre Prisión, Política y Tortura aparejado a folio 19, por lo que, forzoso es concluir, desde las máximas de la experiencia, que se ha producido una lesión o detrimento en su persona, que afectó su integridad física y psíquica, provocándole las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia y en su proyecto de vida; coligiéndose que en virtud de principios internacionales en materia de derechos humanos, los derechos que le fueran conculcados en el contexto de la violencia política sufrida, constituyen por sí solo un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.



Foja: 1

Esto último, se ve refrendado con la prueba rendida por la demandante e individualizada en el considerando cuarto de esta sentencia, en particular, la “evaluación psicológica y de daño moral” de la Sra. Prado Aguirre, realizada por médico psiquiatra Camila Cossio Fernández y psicólogo Pablo Rivera Pastén, quienes en sus conclusiones plantean la existencia de un daño físico y emocional irreparable en la demandante, en el contexto de represión sistemática perpetrada por agentes del Estado de Chile, durante el periodo de dictadura cívico-militar, lo cual, impactó negativamente en todos los ámbitos de su vida, con secuelas a nivel personal, familiar, educacional y laboral; existiendo para los especialistas elementos que configuran una sintomatología concordante con un trastorno de estrés postraumático complejo. Agregan que a nivel familiar, se observan elementos que sugieren un daño transgeneracional en los hijos de la demandante. De lo anterior, se concluye que la referida instrumental reviste las características de gravedad y precisión suficiente para formar convencimiento respecto de los daños reclamados por la actora, de modo que se tendrá como base de una presunción judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil.

Que de este modo, y teniendo en especial consideración la etapa de adolescencia por la cual transitaba la actora a la época de ocurrencia de los hechos (15 años) y la afectación que aquello produjo en su desarrollo personal, más aún, considerando que a lo largo de su vida ha debido soportar de manera permanente e irreversible una cicatriz en su mandíbula derecha producto de la lesión traumática de la cual fue víctima, más la pérdida de piezas dentales producto de aquel traumatismo, influyendo aquello tanto en su autoestima como en su apariencia física, sumado a una constante re-traumatización de lo vivenciado al soportar a diario estas consecuencias físicas; lo anterior, según se deduce de la evaluación psicológica emitida por el PRAIS de Coquimbo, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral por ella experimentada, teniendo especialmente presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, y los principios de racionalidad y prudencia en la determinación de estas indemnizaciones, fijándose, de este modo, a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado, la suma



Foja: 1

única y total de **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos), a favor de la demandante **YASNA PRISCILA PRADO AGUIRRE**.

DÉCIMO NOVENO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la parte demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses corrientes desde que el deudor quede en mora, esto es, desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

VIGÉSIMO: Que, la demás prueba rendida y que no ha sido ponderada, en nada alteran lo precedentemente resuelto.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencido y estimando este magistrado que el demandado ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427, 428 y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1712, 2492 y 2518 del Código Civil; Ley N° 19.992; Ley N°20.874; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, y demás normas pertinentes, **se declara:**

I.- Que **se rechazan** las excepciones de reparación integral y de prescripción deducidas por el FISCO DE CHILE;

II.- Que se **desestiman** las restantes alegaciones de la parte demandada, opuestas en la contestación;

III.- Que **se acoge** parcialmente la demanda deducida, y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma única y total de **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos), a la demandante **YASNA PRISCILA PRADO AGUIRRE**. Al monto anteriormente señalado, deberán



Foja: 1

adicionarse los reajustes e intereses consignados en el fundamento decimonoveno precedente;

IV.- Que **se exime** del pago de las costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelare.

Rol N°C-6037-2022.

Pronunciada por **Marcelo Rojas Sepúlveda, Juez Titular**. Anotada en el registro computacional de causas contenciosas para fallo del tribunal.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintisiete de Febrero de dos mil veinticuatro**



